

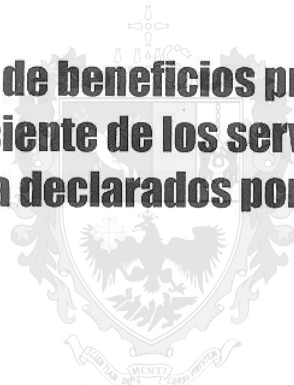
RES  
1512

# **Universidad del Salvador**

## **Facultad de ciencias económicas**

**Licenciatura en economía –Tesis**

**Otorgamiento de beneficios previsionales sin  
acreditación fehaciente de los servicios en relación de  
dependencia declarados por el solicitante**



USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

**Alumno: LOIDL, Carolina Cecilia**

**Tutor: Lic. Leonor D' Angelis**

**Año: 2005**

## ÍNDICE

A. TEMA	3
B. PROBLEMA	3
C. HIPÓTESIS	3
D. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO:	3
E. INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA TRÁMITACIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES	17
F. RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA LABORAL DEL TRABAJADOR	19
G. NORMATIVA REFERIDA A LA ACREDITACIÓN DE SERVICIOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	25
H. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO A UN CASO CONCRETO	27
I. FALENCIAS QUE SURGEN DE LOS CASOS PRÁCTICOS	30
J. PROPUESTAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE OTORGAR PRESTACIONES INDEBIDAS	32
K. CONCLUSIÓN	36
L. ANEXO	38
M. BIBLIOGRAFÍA	75

#### A. TEMA

Beneficios previsionales otorgados a quien no reúne los años de aporte requeridos por la ley.

#### B. PROBLEMA

Para acceder a las prestaciones del régimen previsional, la Ley 24.241 exige la acreditación de un mínimo de años de servicio con aportes a la seguridad social.

A diferencia de los trabajadores autónomos, a quienes sólo se les computan los meses en los que ingresaron aportes, el trabajador en relación de dependencia puede obtener el reconocimiento de períodos por los cuales no se encuentran registros de las contribuciones efectuadas, si presenta pruebas de carácter documental sobre la relación denunciada.

Debido a la falta de información fehaciente sobre los períodos anteriores a la implementación del Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones (SIJP), la tarea de verificación de los servicios declarados por el solicitante, se limita a probar la existencia de la relación laboral y rara vez se comprueba el pago de las contribuciones correspondientes.

La falta de rigor con que se evalúan los servicios prestados en relación de dependencia, ha permitido el otorgamiento de beneficios previsionales a gente que no alcanza los recaudos de la ley, generando graves problemas de inequidad.

#### C. HIPÓTESIS

El modelo de gestión descentralizada de las prestaciones previsionales, unido a la falta de automatización en la resolución de los trámites, favorece el otorgamiento de beneficios previsionales a quien no acredita el mínimo de años de aporte exigido por la ley.

#### D. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO:

La previsión social es el subsistema de la seguridad social destinado a cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte, en el marco del cumplimiento de condiciones de prestación de servicios, realización de tareas y/o pagos de cotizaciones regulares, para los interesados directos o sus causahabientes.

La voluntad del sistema de jubilaciones y pensiones, es corregir la miopía de las familias frente a la necesidad de ahorrar para los períodos de inactividad, diseñando mecanismos que aseguren la reserva de una parte de los ingresos percibidos durante los períodos de actividad, para proporcionarles los recursos financieros necesarios cuando por cuestiones de edad o salud, se vean impedidos de conseguirlos en el mercado de trabajo.

Es con este propósito que el Estado se apropia durante la vida activa del afiliado de una parte de su ingreso en la forma de contribuciones a la seguridad social, y la destina a financiar el sistema para de esta forma asegurarle el consumo durante la vejez, invalidez o la sobrevivencia de sus dependientes en el caso de que el trabajador fallezca.

La *jubilación* es el derecho a la obtención de una prestación monetaria periódica vitalicia o por lapsos prolongados, que asume la comunidad como contraprestación a los afiliados, por servicios cumplidos y pago de cotizaciones obligatorias al fondo común durante períodos determinados, al llegar a edades mínimas básicas y/o por la acreditación de deficiencias patológicas que devienen en incapacidades laborales.

La prestación de servicios con aportes al sistema de seguridad social por parte del titular, es el requisito básico para la obtención de una prestación previsional. Se añade el cumplimiento de cierta edad en la jubilación ordinaria y por edad avanzada, y el de incapacidad laboral en la jubilación por invalidez.

La *pensión* constituye el derecho a la obtención de una prestación monetaria periódica, vitalicia o por períodos prolongados, que corresponde a los causahabientes de los jubilados o titulares de un derecho a jubilación, como consecuencia del fallecimiento de éstos.

El Sistema Previsional Argentino es uno de los más antiguos del continente, comienza a organizarse en 1904 con la creación del primer programa de pensiones para empleados de la administración pública central, y en 1915 se extiende a los trabajadores del sector privado cuando se inaugura la Caja Jubilatoria de los trabajadores ferroviarios.

Durante los primeros cincuenta años de existencia, el sistema fue expandiéndose gradualmente, y para 1940 alrededor del 7% de la fuerza laboral estaba protegida con una amplia gama de esquemas heterogéneos. En su mayor parte,

los esquemas estaban diseñados como regímenes capitalizados, pero en muchos casos su condición financiera a largo plazo era débil, y el sistema de jubilaciones se convirtió lentamente en un esquema de reparto administrado por un organismo gubernamental, el Instituto Nacional de Previsión Social creado en 1954, que abarcaba a la mayor parte de la fuerza laboral con empleo formal.

En un principio, la gran proporción de aportantes y la baja cantidad de beneficiarios permitía pagar altos beneficios con bajas tasa de contribuciones. En 1958, se estableció que los beneficios equivaldrían al 82% del sueldo de los trabajadores activos que ocuparan un puesto similar, pero no se aprobó un incremento significativo de los aportes ni de la edad de jubilación. Como consecuencia, a mediados de la década del 60 las distintas cajas enfrentaron graves problemas financieros, lo que llevó a la aprobación de una nueva ley que consolidó en sólo tres fondos a la mayoría de las cajas preexistentes a nivel nacional:

- Estado y Servicios Públicos;
- Industria, Comercio y Actividades Civiles
- Trabajadores Autónomos

Si bien quedaron trabajadores regidos por otros sistemas, como los empleados públicos provinciales y municipales, militares y policías, la reforma pretendió unificar las múltiples cajas en dos esquemas:

- El primero comprende a todos los trabajadores en relación de dependencia y se encuentra regido por la Ley 18.037;
- El segundo agrupa a los trabajadores autónomos o independientes bajo la Ley 18.038.

Con la promulgación de las dos leyes se disolvió el Instituto Nacional de Previsión Social y se creó la Secretaría de Seguridad Social como organismo a cargo del sistema. Se suprimieron regímenes de privilegio y jubilaciones adelantadas, se incrementaron las contribuciones hasta alcanzar el 20% del salario (el aporte del trabajador quedó en un 5% y el 15% restante a cargo del empleador), se llevó la edad mínima para jubilarse a 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, y se reguló el cálculo del haber de modo más restrictivo estableciéndose el 82% móvil sólo para aquellos que superaran los 30 años de servicios.

Durante la mayor parte de la década del 80 el sistema enfrentó crecientes déficit provocados por el envejecimiento de la población, el incumplimiento del pago de las contribuciones por parte de los trabajadores y la mala administración de los fondos. Para controlar la escasez de recursos se trató de postergar el ajuste de los beneficios previsionales según el costo de vida. Esta estrategia condujo al inicio de una enorme cantidad de demandas contra el gobierno, las que en general fueron resueltas a favor de los jubilados.

En los primeros años de la década del 90 la necesidad de introducir una reforma se había vuelto imperiosa. La estrategia de evitar el aumento de los beneficios había resultado contraproducente y la deuda acumulada con los pensionados se calculaba en un 3% del PIB. En esta coyuntura, enfrentando un grave debilitamiento del sistema en su capacidad de pagar los beneficios, una situación fiscal empeorada y una estructura institucional altamente ineficiente, el Gobierno preparó un proyecto de reforma previsional que presentó al Congreso en 1992.

Después de un prolongado tratamiento en el Congreso, la nueva ley fue aprobada el 23 de octubre de 1993 y el nuevo sistema, denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), comenzó a operar en julio de 1994.

Las principales reformas consistieron en cambios en los parámetros del sistema, que incluían un incremento en la tasa de aportes de los empleados, un aumento de cinco años en la edad mínima de jubilación, un incremento en la cantidad de años de aporte requeridos que pasó de 20 a 30 años, y cambios en la organización institucional.

Con la promulgación de la Ley 24.241 se instituyó un sistema único de seguridad social, con alcance nacional, que cubre las siguientes contingencias:

- Vejez, a través de la jubilación ordinaria y por edad avanzada
- Invalidez, a través de la jubilación por invalidez
- Muerte, a través de la pensión

El financiamiento del sistema es similar al del antiguo régimen, con aportes por parte del trabajador, contribuciones a cargo del empleador y asignaciones específicas de recurso impositivos, pero se organizaron dos mecanismos:

- Un sistema de reparto a cargo del Estado, donde el acceso a las prestaciones está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos de

edad y años de aporte, y el haber percibido no guarda estrecha relación con las contribuciones efectuadas por el trabajador.

- Un régimen previsional basado en la capitalización individual, donde las prestaciones se fijan en función del monto acumulado en el fondo de pensión, a partir de criterios actuariales basados en la esperanza de vida al momento de jubilarse.

El trabajador opta por el régimen que cree más conveniente dentro de los 90 días de iniciada su actividad, y si bien puede entrar al sistema de capitalización en cualquier momento, la vuelta al régimen de reparto no está permitida una vez que se adhiere a la capitalización.

La obligación de aportar al régimen jubilatorio continúa vigente para todo aquel que realice una actividad económica, aun para los afiliados a la capitalización, para quienes la prestación se financia y calcula en función del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual del solicitante.

Ningún afiliado aportante a un régimen de seguro social solventa con sus propias contribuciones el beneficio que oportunamente le corresponderá. Como consecuencia de este principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que la obligación de aportar a un régimen jubilatorio rige aun cuando el afiliado eventualmente no llegare a gozar de ninguno de los beneficios del régimen previsional (CSJN 12/05/94 –Derecho del Trabajo, Tomo XXIV, Pág. 347).

Para quienes optaron por el régimen de capitalización individual, los aportes personales se ahorran en cuentas individuales que financian la jubilación ordinaria, aplicándose a ese monto el descuento correspondiente a las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que incluye la prima del seguro de invalidez y muerte y los gastos de operación de la Administradora. Los aportes personales de los trabajadores adheridos al régimen de reparto y las contribuciones patronales, financian las prestaciones administradas por el estado. La recaudación total de aportes y contribuciones está a cargo del Estado, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El artículo 2 del decreto 679/1995, reglamentario de la Ley 24.241, define los alcances de la expresión “años con aportes”.

Se consideran servicios con aportes al sistema de seguridad social:

- Tratándose de actividades en relación de dependencia, los períodos respecto a los cuales se hubieren devengado y retenido los aportes y contribuciones correspondientes;
- En el caso de actividades autónomas, los períodos respecto de los cuales se hubieran devengado e ingresado las pertinentes cotizaciones.

Los beneficios que otorga el régimen de reparto, y requieren la acreditación de una determinada cantidad de años de servicio con aportes, son los siguientes:

- *Jubilación ordinaria o PBU-PC-PAP*: es la suma de tres componentes, la prestación básica universal (PBU) que se paga a todos aquellos afiliados que alcanzaron la edad jubilatoria y reúnen un mínimo de treinta años de servicios con aportes; la prestación compensatoria (PC) que se calcula en función de los años de servicio trabajados antes de julio de 1994; y la prestación adicional por permanencia (PAP) que se abona a quienes continuaron en el régimen de reparto.
- *Retiro por invalidez*: se otorga por un período de tres años, a todo aquél que por razones de salud se ve impedido de continuar en actividad, siempre que se acredite un mínimo de dieciocho meses de aporte dentro de los treinta y seis meses anteriores a la solicitud, y un porcentaje de incapacidad laboral del sesenta y seis por ciento.

El cobro de la prestación por invalidez es incompatible con el desempeño de tareas en relación de dependencia.

- *Pensión por fallecimiento del afiliado en actividad*: tendrán derecho al beneficio de pensión los hijos menores de dieciocho años, el cónyuge y/o conviviente del trabajador que reúna un mínimo de dieciocho meses de aporte dentro de los treinta y seis meses anteriores al fallecimiento.
- *Prestación por edad avanzada*: se otorga a quien alcanza la edad de 70 años sin ningún beneficio previsional, siempre que acredite un mínimo de diez años de servicio con aportes, con cinco años prestados dentro de los ocho anteriores al cese de actividad.

La jubilación ordinaria que otorga el régimen de capitalización, no requiere la acreditación de una determinada cantidad de años de servicio sino solamente